

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Bogotá, D.C., 01 de septiembre de 2020

Referencia: MEDIDA DE PROTECCIÓN 766-2020

De: LEYDY TATIANA ALVAREZ PAEZ

Contra: ANDRES ALBERTO RAMIREZ DUQUE

PROCESO No. 2020-00285 2DA INSTANCIA

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación previo las siguientes,

ANTECEDENTES

El 19 de julio de 2019 la señora LEYDY TATIANA ALVAREZ PAEZ presentó solicitud de medida de protección contra ANDRES ALBERTO RAMIREZ DUQUE denunciando hechos de violencia intrafamiliar, donde luego de agotado el procedimiento de Ley, la Comisaría doce de Familia de esta ciudad mediante providencia emitida el día 13 de julio de 2020 declaró probados los hechos de violencia intrafamiliar denunciados e impuso medida de protección en favor de la accionante y del menor de edad JUAN ANDRES RAMIREZ ALVAREZ.

La accionante interpuso el recurso de apelación señalando en síntesis de su inconformidad que no está de acuerdo con que en el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia se haya levantado la medida provisional de emergencia consistente en el desalojo del señor ANDRES ALBERTO RAMIREZ DUQUE del lugar de residencia, ya que son víctimas de violencia intrafamiliar y su hijo se encuentra más tranquilo desde que su papá no está en casa.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar*

donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...".

El artículo 18 *Ibíd*em prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

El artículo 5° de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *"El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley."*

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *"golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte"*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *"actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia"*^[1]; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que la denunciante sostiene su inconformidad respecto a que no está de acuerdo en que se haya levantado la medida provisional de desalojo de la residencia al agresor, pues tanto ella como su menor hijo han sido víctimas de violencia intrafamiliar y su hijo se encuentra más tranquilo desde que su papá no se encuentra en la casa.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro del plenario quedó demostrado inclusive por parte de la misma accionante así como de la entrevista surtida con el menor de edad JUAN ANDRES RAMIREZ DUQUE, que el accionado ya se había ausentado del hogar, adicional a ello dentro del trámite de la medida de protección tal como lo indicó la comisaría de familia no se logró demostrar el presunto abuso sexual por parte del accionado hacia su hijo menor, razones suficientes para no mantener dicha orden de desalojo, pues al mismo haberse ausentado de su hogar ya depende es de la misma accionante el permitirle o no el retorno al hogar, en lo demás la comisaría de familia garantizó los derechos de las víctimas imponiendo las medidas de protección definitivas en su favor y en contra del señor ANDRES ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ.

Razón anterior más que suficiente para confirmar la decisión impuesta por la Comisaría 19 de Familia – Ciudad Bolívar 2 de Bogotá D.C.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del trece (13) de julio de dos mil veinte (2020) proferida por la Comisaría Diecinueve de Familia de esta ciudad.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: DEVUÉLVASE las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

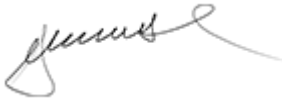
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

CG

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE ORALIDAD
BOGOTA D.C.
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
SECRETARIA
Bogotá D.C 02-09-2020_(artículo 295 del C.G.P.)
El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO
58

Secretario: _____
TOMAS OLAYA GONZÁLEZ

^[1] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html